



Humberto Musacchio

Periodista y autor de *Milenios de México*

hum_mus@hotmail.com

La extinción del equilibrio

En México, los liderazgos cambian cada seis años y, hasta ahora, pese a las señales en contrario, se mantienen las leyes y otras realidades que garantizan una mudanza de personas y de líneas políticas, la que se hace efectiva más temprano que tarde, como lo han demostrado el gran Lázaro Cárdenas y hasta el mediocre Ernesto Zedillo.

En el caso del Poder Judicial, la mayoría de las opiniones coinciden en que hay corrupción. Cualquiera sabe, entre muchos otros casos, de un conocido delincuente exonerado por un juez, la mujer violada y luego castigada con la liberación de su agresor, los encarcelados por ser pobres. Ahora misma presenciamos cómo el fraude a Segalmex se va haciendo chiquito y en cualquier momento desaparece, mientras los culpables quedan libres y el máximo responsable sigue como funcionario federal.

La lista de los fallos errados, de las dilaciones inexplicables y los atentados contra la más elemental noción de justicia ocuparían muchos y muy gruesos tomos. Así de grave es la situación del Poder Judicial. Por eso está claro que urge una reforma de fondo. Pero los cambios necesarios no resultan aceptables si se impone a rajatabla un proyecto aprobando sin el mínimo análisis ni el indispensable debate.

Es inaceptable la corrupción, pero no todos los togados ni menos aún la cabalidad de quienes trabajan en los juzgados practica las formas sucias de orientar un fallo. Hay jueces que viven en la honrosa medianía juarista, lo mismo que numerosos empleados del Poder Judicial.

Por otra parte, no puede efectuarse una limpia en el ámbito de justicia con una policía inepta y agentes del Ministerio Público indolentes, incapaces o corruptos. Y cabe tener presente que policías y Ministerio Público son parte del Poder Ejecutivo, no del Judicial. Pero es mejor ignorar esa realidad si se trata simplemente de obedecer la orden que baja de las alturas, sobre todo en la perspectiva de hacer carrera política cuando algunos creen que el 1 de octubre presenciaremos un despliegue gatopardista, según el cual todo cambio será para que nada cambie.

Más allá de las intenciones o los miedos, de las advertencias y las apariencias, el sexenio terminará el último día de este mes. En México, los liderazgos cambian cada seis años y, hasta ahora, pese a las señales en contrario, se mantienen las leyes y otras realidades que garantizan una mudanza de

personas y de líneas políticas, la que se hace efectiva más temprano que tarde, como lo han demostrado el gran Lázaro Cárdenas y hasta el mediocre Ernesto Zedillo.

Lo que no ha cambiado es el servilismo del Legislativo al Ejecutivo, herencia histórica de la prolongada dominación priista. No podía ser de otra manera, si se considera que el grueso de la llamada clase política de hoy viene del PRI y de aquellos años de presidencialismo incommovible, absoluto y despótico. La mayoría de quienes hoy viven del presupuesto nacieron y crecieron amamantados por el partido tricolor.

Por supuesto, en Morena y en el gobierno hay funcionarios que son ramas de otro árbol genealógico. Son los que batallaron para acabar con el viejo régimen, los que vieron morir a cientos de sus compañeros de lucha, los que combatieron por la libertad de los presos políticos, los que condenaron sin rodeos la represión de la vieja dictadura sexenal y sus loas a la Ley, pero sin respetarla.

Antier, en un despliegue de indignidad, se votó la reforma judicial, pero la resistencia contra la imposición continuará, aunque lo esperable es que las legislaturas locales procedan también en forma bovina. Desde luego, el asunto se irá a instancias internacionales, lo que, como bien se sabe, puede tardar años.

De modo que sólo quedará la movilización interna, levantar las viejas banderas de la lucha democrática y reactivar la militancia por un país democrático y rechazar la elección por voto universal de los candidatos a jueces, magistrados y ministros propuestos por el gobierno en turno, o peor aún, por los poderes fácticos, pues ahora mismo no son pocos los alcaldes, diputados y hasta gobernadores impuestos por el crimen organizado.

La indignidad legislativa y la compra de tráfugas de la oposición marca en forma indeleble un proceso que se resolvió en forma repulsiva, sucia, cuando lo aconsejable hubiera sido promover una discusión amplia con la oposición, con sus propuestas, con el ánimo de impedir la corrupción y de evitar la injusticia. Pero no era ése el propósito, sino exhibir la sumisión del gremio de levantados y aplastar toda disidencia.

Pero la película no termina aquí...

En Morena y en el gobierno hay funcionarios que son ramas de otro árbol genealógico.